

Debate de platos rotos

JOSÉ MARÍA RIDAO

El debate del estado de la nación que comienza mañana será el último de la legislatura y, por esta misma razón, podría perfilarse como el primer acto de campaña de las próximas elecciones generales. Salvo —que el Gobierno sea capaz de proponer nuevas iniciativas, transmitiendo el implícito mensaje de que una legislatura es insuficiente para completar la parte menos contestada de su gestión, socialistas y populares parecen condenados por la fuerza de las circunstancias que ellos han creado a una reiterativa exhibición de los mismos argumentos, sólo que de signo distinto—. Unos y otros sentirán sin duda la tentación de acusarse de deslealtad en materias de Estado, en particular en la lucha contra el terrorismo, al mismo tiempo que intentarán demostrar que cuanto han hecho en este campo venía dictado por el deber y la responsabilidad. De confirmarse este esquema, ésa sería la prueba de que ni uno ni otro han mantenido posiciones irreprochables durante esta legislatura, tratando de sacar ventaja de las debilidades y los errores de la otra parte.

La resolución de mayo de 2005 que abrió las puertas a la estrategia del final dialogado del terrorismo supuso un inesperado punto de inflexión: fue en ese momento cuando el Partido Socialista, que en la oposición pretendía pactar todo con el Partido Popular, pasó a pactar con todos excepto con el PP una vez que alcanzó el Gobierno. Así se colocó en la situación en la que hoy se encuentra, aprisionado entre dos compromisos contradictorios, uno adquirido con el Partido Popular en el Pacto Antiterrorista y que tuvo como resultado principal la Ley de Partidos, y otro suscrito con el resto de las fuerzas parlamentarias, entre las que son mayoría las opuestas a esa norma. Mientras los terroristas mantuvieron formalmente en vigor la tregua que abrió paso a las conversaciones ahora fracasadas la contradicción entre los dos compromisos adquiridos por el Partido Socialista pasaron a un segundo plano. Tras el comunicado de ruptura y la subsiguiente necesidad, de recuperar la unidad de los partidos democráticos, la contradicción no puede ser mantenida por más tiempo.

Por lo que se refiere al Partido Popular, su posición a partir de la resolución de mayo de 2005 parecía dictada por un equívoco inquietante: su sentido de Estado en materia antiterrorista se limitaba, exclusivamente, a mantener un pacto con su principal adversario político, en este caso los socialistas. Al considerar que ese pacto había dejado de cumplirse, no es que rompió con los socialistas, es que pareció romper con el Estado. Durante los quince meses que se ha prolongado el insensato y zigzagueante "proceso de paz", el Partido Popular no se ha limitado a contestar una política equivocada, sino que ha puesto en entredicho a la justicia y las fuerzas de seguridad, amplificando la atmósfera de sospecha creada por los medios de comunicación amarillistas en torno al juicio del 11 de marzo. Además, ha llevado la división política a las calles, en lugar de reconducirla a las instituciones para evitar los riesgos de que las pasiones se desbordaran. Y por si no fuera bastante, ha tolerado que su presidente de honor recorriese el mundo anunciando que España se precipitaba hacia la catástrofe, aparte de convocar manifestaciones ridículas ante los consulados y embajadas, como si se tratase de disidentes de

una dictadura. Ni siquiera la más, inconcebible de las torpezas de un Gobierno democrático autorizaba a tanto.

Existe tal abundancia de platos rotos que será difícil que el debate del estado de la nación no se convierta en una nueva disputa tabernaria para ver quién paga la factura, y eso que, para sorpresa de propios y extraños, el narcisismo de los terroristas aún no les ha llevado a hacerse presentes para estar seguros de que se habla de ellos. Si los tres días de intervenciones que se inician mañana no desembocan en un acuerdo que vuelva a sumir a los terroristas en la irrelevancia política, en el autismo al que debería condenarles su recurso a las pistolas, se habrá emprendido un camino que, seguramente, tampoco las próximas elecciones generales ayudarán a desandar.

El País, 2 de julio de 2007